

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL PERU
SOBRE POLITICA DE CONTROL DE DROGAS Y DESARROLLO ALTERNATIVO

A. INTRODUCCION

1. En el marco de las conversaciones bilaterales que se realizaron en Washington D.C y Lima, entre enero y abril de 1991, representantes de los gobiernos de la República del Perú (Gdelp) y los Estados Unidos de América (GdeEUA) evaluaron los acuerdos suscritos en la Cumbre Presidencial de Cartagena acerca de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas.

2. Ambos gobiernos se comprometieron a reforzar la naturaleza integral de las políticas requeridas para alcanzar una solución a este problema tan complejo y de ramificaciones múltiples.

3. A la luz de un análisis exhaustivo y un diálogo abierto, los gobiernos admiten que las acciones desarrolladas hasta ahora en la lucha contra el narcotráfico en el Perú no han alcanzado los resultados esperados. Hasta el año pasado el área dedicada al cultivo de la coca se ha incrementado en lugar de reducirse y existe evidencia de que elementos organizados del extranjero y bandas armadas peruanas han comenzado a participar en la comercialización y expansión del cultivo dentro del país.

4. Ante esta situación, los gobiernos han llegado a un entendimiento político para la creación de una asociación bilateral, que debe ser coordinada al pertinente nivel político más alto de ambos países, para desarrollar una estrategia que tenga como fin atacar las causas mismas del problema, tanto desde el lado de la oferta como del de la demanda, y proveer los instrumentos necesarios para lograr en el más breve plazo una reducción sustancial o la total eliminación del cultivo ilegal de la hoja de coca en el Perú y la comercialización de sus derivados.

FM
any

5. Los gobiernos consideran, asimismo, que este Convenio bilateral es de vital importancia para alcanzar los objetivos globales de la humanidad contra la droga, pues involucra simultáneamente al mayor consumidor de los derivados de la coca y al mayor productor de hoja de coca. Una coordinación estrecha a los más altos niveles decisorios entre los gobiernos soberanos de territorios en los que se han concentrado en proporciones tan mayoritarias la producción y el consumo de este flagelo, permitiría una rápida capacidad de reacción y estar siempre en posición de romper la cadena del narcotráfico por sus eslabones más débiles y en los momentos más oportunos.

6. Los gobiernos estiman que la viabilidad y estabilidad de un acuerdo internacional de cooperación dependen en gran medida de la aceptación que logren en la opinión pública de los países que lo suscriben. El consenso recogido en la opinión pública peruana por la Iniciativa Fujimori y la aceptación generalizada de la creación de una sola organización directamente dependiente del Presidente de la República para enfrentar varias facetas de este problema - una autoridad autónoma- le otorga a este Convenio una legitimidad que lo convertirán en un eficaz instrumento en la guerra contra el narcotráfico.

7. Así, al recoger las inquietudes y el consenso peruanos para integrarlos en una estrategia que los combine con la política de los Estados Unidos, este Convenio superará la tradicional forma de colaboración entre los Estados Unidos y el Perú en esta materia. En la nueva forma de cooperación planteada por el Convenio, la lucha contra el narcotráfico se entiende como una tarea de ambos países, una asociación bilateral tal como se la imaginó en la Declaración de Cartagena, y no como una preocupación y una responsabilidad fundamentalmente de los Estados Unidos en territorio peruano.

8. La asociación entre ambos países al más alto nivel político posibilitará, además, el aprovechamiento de la invalorable experiencia y visión de conjunto que ha ido acumulándose en el Perú acerca del cultivo, la comercialización y otros aspectos de la oferta de la coca. Del mismo modo, estimulará la participación de los peruanos más capacitados -tanto en el campo militar y policial, como en otras materias relacionadas con la tecnología, el desarrollo, los derechos humanos y la protección del medio ambiente- en esta lucha, la que de esa manera podrá constituirse en prioridad nacional.

TMM
any

9. La colaboración de ambos gobiernos para concebir y realizar una estrategia global permitirá también evaluar la posibilidad de darle una mayor y más detallada consideración a las acciones a ser adoptadas desde el lado de la oferta, ya que:

(a) Los campesinos peruanos producen coca a pesar de que varios otros cultivos podrían resultarles tanto o más rentables, en tanto que el precio de la hoja de coca se mantiene bajo. Su dependencia del cultivo de la coca es factible de ser superada, a condición de que se tomen las medidas de ajuste estructural y desarrollo alternativo, y se provea la infraestructura requerida para ofrecer las facilidades necesarias y retirar los obstáculos para producir y vender los múltiples productos alternativos a la coca.

(b) Los campesinos cocaleros constituyen una clase económica y social muy distinta a la que conforman las personas dedicadas al narcotráfico. Los primeros son pobres y se dedican a esa actividad mayormente por razones de subsistencia, porque no pueden ingresar legalmente a otra; los segundos son prósperos y no enfrentan barreras de ese tipo. A diferencia de los traficantes, los campesinos no dependen de la coca, pueden -y de hecho lo hacen- cultivar otros productos más rentables. Los campesinos, en buena parte, están ya listos para ser organizados como interlocutores de un diálogo que busque alcanzar las metas que nos estamos trazando en este Convenio, convirtiéndose en los principales ejecutores de las acciones que esta estrategia supone y haciéndola suya.

10. Consecuentemente, los gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República del Perú han llegado a un entendimiento político para cooperar, dentro del marco de esta asociación bilateral, para establecer y ejecutar una estrategia común para combatir el tráfico de drogas, basada en las políticas que se desarrollan a continuación.

B. POLITICAS

Fortalecimiento institucional

11. Las partes se comprometen a completar, dentro de los seis meses de la fecha de la firma de este Convenio, la estructuración de esta asociación bilateral para establecer y ejecutar estrategias contra el narcotráfico y a favor del desarrollo alternativo.

TMM
any

12. Antes de esa fecha el Perú habrá creado el marco normativo y puesto en funcionamiento una autoridad autónoma del más alto nivel político y directamente dependiente del Presidente de la República, con el objeto de lograr una coordinación eficiente con una autoridad de competencia decisoria en niveles equivalentemente altos en el GdeEUA. De esta forma se buscará remontar la dispersión y yuxtaposición de competencias que hoy afecta a diversos sectores de la administración de ambos países.

13. En lo concerniente a medidas de interdicción y seguridad, el GdeLP propondrá políticas diseñadas a restarle estímulos al narcotráfico. El GdeLP podrá también incluir políticas para la coordinación entre la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea peruanas, que permitan resultados rápidos en todo lo relativo a la seguridad, los controles, las interceptaciones y las capturas requeridas. A tal efecto, la autoridad autónoma peruana será responsable de distribuir los medios necesarios para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como de neutralizar la multiplicidad de obstáculos actualmente existentes.

14. Los gobiernos son conscientes de que las medidas relativas a seguridad e interdicción requerirán de un sistema de coordinación entre ambos países, pues el propósito de la institucionalización de la asociación bilateral es combatir a un enemigo poderoso -el narcotráfico- cuyas acciones son rápidas, imprevisibles y tienden a infiltrar la política y el gobierno.

15. Los firmantes reconocen la necesidad de que intervengan por ambas partes personas o entidades que hagan posible activar los grandes instrumentos políticos para alcanzar los objetivos referidos en este Convenio. Algunos ejemplos son la Iniciativa para las Américas, del Presidente Bush; el Plan Brady, del Secretario del Tesoro de los EEUU y la Declaración de Cartagena. Dos otros ejemplos son la Iniciativa del Presidente Fujimori y el proyecto HOPE del Presidente Bush, que coinciden en enmarcar la lucha contra las drogas dentro de una perspectiva cuyo propósito es hacer llegar los beneficios de la propiedad privada, la reforma estructural, las oportunidades alternativas y la economía de mercado a los sectores más pobres de sus países.

MM
any

Derechos humanos

16. Ambas partes evocan las palabras de la Declaración de Cartagena en el sentido de que nada sería tan eficaz para minar la lucha contra las drogas como la desatención de los derechos humanos por los participantes en el esfuerzo, y reiteran la importancia de llevar a cabo esta lucha dentro del contexto de los patrones sobre derechos humanos desarrollados internacionalmente, tales como la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra. El mensaje inaugural del Presidente Fujimori diseñó una política de respeto irrestricto a los derechos humanos, de manera que ambas partes convienen en que deben incluirse acciones como el acceso irrestricto al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Ajuste estructural y desarrollo alternativo

17. El Gdelp considera, y el GdeEUA toma nota de que, hay que poner en marcha un programa de ajuste estructural sólido, pues es solamente con la corrección de las políticas económicas que distorsionan el mercado de la producción de bienes y servicios legales que se crearán los incentivos y recursos para la inversión en un desarrollo alternativo.

18. En este sentido, será necesario incluir también bajo este rubro las reformas que garanticen, en primer lugar, que las causas mismas de las distorsiones estructurales se corrijan, para que el ajuste sea viable y duradero; y, en segundo lugar, que se prioricen medidas al nivel micro económico que beneficien en forma inmediata a las clases marginadas que son las más involucradas en el cultivo de la coca y su elaboración inicial.

19. Las causas institucionales de las distorsiones sólo se eliminarán si la ciudadanía tiene acceso a la información relevante y puede participar en el proceso de creación de las normas y decisiones relativas a sus problemas. Asimismo, deben existir sistemas judiciales y administrativos eficientes, a los cuales todo ciudadano pueda recurrir en caso de que sus oportunidades de acceder a una actividad productiva legal sean limitadas, sobre todo cuando esto es consecuencia de acciones arbitrarias y abusivas por parte del Estado u otras organizaciones.

TMM
any

20. El ajuste estructural micro económico debe estar dirigido a las estructuras que tienen mayor efecto sobre los menos favorecidos -que son la mayoría de los peruanos involucrados en el cultivo de la coca, o con mayores posibilidades de verse envueltos en dichos cultivos- y que son las referidas a la dificultad o imposibilidad legal de desarrollar plenos derechos en los mercados legales, hoy artificialmente restringidos. El ajuste micro económico estará dirigido especialmente a permitir el acceso universal y rápido de los campesinos a la propiedad formal, a su usufructo y utilización para garantizar la obtención de crédito, el acceso a la empresa, al comercio exterior y a la participación en la formación de precios.

21. Concretamente el ajuste estructural micro económico en las zonas cocaleras supondría lo siguiente:

(a) Crear los instrumentos democráticos que permitan involucrar a los ciudadanos directamente en el proceso de toma de decisiones;

(b) Reconocer, adjudicar y registrar derechos patrimoniales;

(c) Donde haya producción ilegal de coca, celebrar acuerdos de sustitución con los campesinos, sus representantes legales y/o sus organizaciones, quienes recibirán los beneficios de las medidas aquí enumeradas;

(d) Los programas de erradicación deben tener en consideración la salvaguarda de la salud humana y la preservación del ecosistema, y deben ser revisados en cada caso para determinar si dichos programas serán más efectivos como voluntarios u obligatorios o una combinación de ambos, y sus probables consecuencias políticas y sociales;

(e) Fomentar nuevas oportunidades económicas, tales como programas para desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, que ayuden a disuadir a los campesinos de iniciar o expandir el cultivo ilegal. Nuestro objetivo es la reducción sostenida del área total bajo cultivo ilegal;

(f) Implementar programas de reforestación en aquellas áreas donde la coca sea erradicada y que no sean favorables para la agricultura;

FM
any

(g) Facilitar sustancialmente el acceso a la actividad empresarial y al crédito a todos aquellos involucrados en actividades de desarrollo alternativo, incluyendo la sustitución de cultivos;

(h) Desmantelar las trabas y mecanismos burocráticos, particularmente aquellas que limitan la producción, comercio y exportación de bienes alternativos;

(i) Estimular la participación de todas las partes interesadas en aportar soluciones técnicas y realizar proyectos concretos de desarrollo alternativo con los campesinos y/o sus organizaciones.

22. Las actividades de desarrollo alternativo no deberían circunscribirse solamente a las zonas cocaleras, sino también incluir las áreas de donde proviene la migración de la mano de obra hacia ellas. Igualmente aquellas que puedan ofrecer un empleo alternativo a quienes cultivan o podrían, en el futuro, empezar a cultivar coca.

Seguridad

23. Para alcanzar los objetivos planteados en este Convenio será necesario establecer un marco de justicia, respeto a los derechos humanos, orden, seguridad y paz en todas las zonas vinculadas al narcotráfico y actividades conexas.

24. Para establecer este marco será preciso dar seguridad a las áreas donde se lleve a cabo el proceso de sustitución y proteger las actividades de interdicción. El objetivo de dichas acciones es permitir que entidades civiles faciliten el desarrollo alternativo y las medidas de ajuste estructural. Se otorgará seguridad en concordancia con los patrones internacionales de observancia a los derechos humanos.

25. Los gobiernos se proponen establecer, en el menor plazo posible, una estrategia cuyos lineamientos centrales están basados en las siguientes consideraciones:

(a) La necesidad de alimentar, equipar, entrenar, uniformar y apoyar adecuadamente a las fuerzas armadas y policiales que van a luchar contra el narcotráfico y quienes lo apoyan y alientan;

TMM
any

(b) La posibilidad de que los recursos militares puedan dedicarse también a apoyar acciones de índole social, económica y cívica que beneficien a las personas afectadas por el narcotráfico y la violencia en aquellas áreas donde ambos fenómenos coinciden;

(c) La necesidad de tomar las medidas requeridas para facilitar el acceso de la población afectada a los sistemas judiciales y administrativos, con el fin de proteger los derechos humanos, civiles y políticos y la propiedad; y,

(d) La conveniencia de que el equipamiento de las fuerzas armadas y policiales se realice, en la medida de lo posible, utilizando los suministros, la mano de obra y las materias primas producidas localmente.

Interdicción

26. Las acciones de interdicción deberán realizarse en cada una de las etapas del proceso de producción, distribución y consumo ilegal de la coca y sus derivados, y enmarcarse dentro del plan de seguridad integral establecido por el Gdelp, sin poner en ningún momento en peligro el marco de justicia, orden público, seguridad y paz que se busca establecer.

27. Las acciones de interdicción son de diversa índole y pueden resumirse en las siguientes:

(a) Eliminación de cultivos de coca de acuerdo con pactos celebrados con los campesinos cocaleros y las políticas del Gdelp en la materia;

(b) Fiscalización, investigación y control de químicos esenciales divertidos al Tráfico Ilícito de Drogas (TID);

(c) Localización y destrucción de centros de procesamiento de drogas ilícitas;

(d) Control, incautación o destrucción de infraestructura o medios de transporte utilizados para el TID;

(e) Desarticulación de las organizaciones dedicadas al TID;

(f) Lucha contra la drogadicción combatiendo la micro-producción de drogas ilícitas, cadenas de abastecimiento y cadenas de distribución;

Handwritten signatures in blue ink.

(g) Investigación y acusación de narcotraficantes y demás personas vinculadas con el procesamiento y tráfico de los derivados de la coca;

(h) Lucha contra el enriquecimiento ilícito procedente de varias fuentes y el ocultamiento o lavado de recursos ilegales, a través de medios tales como sistemas de contabilidad adecuados de las instituciones financieras, intercambio internacional de información que incluya los documentos de transacciones financieras, investigaciones a nivel nacional e internacional, cooperación en materia de observancia de la ley e investigación de injustificados signos exteriores de riqueza;

(i) Incautación de activos de individuos y organizaciones dedicadas al narcotráfico, utilizando dichos bienes para beneficio de las actividades de lucha contra los narcóticos del Estado Peruano.

28. Para lograr todo esto, hará falta una mayor eficacia de los organismos competentes gracias a un mejor equipamiento, entrenamiento y pago de las fuerzas policiales encargadas de la interdicción, así como también el desarrollo de un sistema de inteligencia más completo en lo relativo a esta materia.

29. Un efectivo proceso de interdicción requerirá, además, mejorar los procedimientos legales, otorgar seguridad a los jueces y fortalecer el sistema carcelario y eliminar su corrupción.

Prevención

30. Los gobiernos se proponen crear conciencia en la opinión pública acerca de la necesidad de enfrentar el problema del narcotráfico y la droga en todas sus dimensiones y con acciones concretas de prevención que se pueden resumir en la siguiente forma:

(a) Sensibilización de la opinión pública contra el narcotráfico y el uso de las drogas a través de campañas publicitarias y distribución de material educativo;

(b) Reclutamiento de líderes de opinión para sensibilizar al público sobre el impacto del narcotráfico y de las drogas, convirtiéndolos así en agentes preventivos;

Y,

TMM
any

(c) Generación y difusión de información acerca del narcotráfico, las drogas y sus efectos nocivos en la sociedad, mediante la investigación, la capacitación, la asistencia técnica y el uso de los medios de comunicación.

31. La relación entre instituciones de prevención peruanas y estadounidenses deberá ser desarrollada y apoyada para poder intercambiar experiencias y resultados y establecer vínculos de cooperación conjunta.

32. Mediante esfuerzos públicos y privados el programa de prevención recibirá recursos y asistencia para desarrollar sus proyectos. Asimismo, se buscará asistencia técnica y financiera para incrementar los recursos disponibles para este fin.

Acción contra la corrupción

33. Los gobiernos consideran que uno de los aspectos más perniciosos del narcotráfico es la destrucción de la base moral de la sociedad a través de la intimidación y soborno de jueces, autoridades encargadas de administrar las cárceles, miembros de las fuerzas militares y policiales, el gobierno, de compañías privadas y de partidos políticos.

34. Esta corrupción se puede prevenir mediante trabajos de inteligencia, investigación, vigilancia; asimismo, a través de la revisión de la legislación y de los procedimientos administrativos.

35. En este contexto, el Gdelp ha anunciado su intención de poner en marcha un comité contra la corrupción y ambos gobiernos están dedicados a prevenirla, investigarla y enjuiciar los casos que se presenten.

Ecología

36. Los gobiernos de Estados Unidos y el Perú se comprometen a trabajar en forma conjunta para diagnosticar las consecuencias ecológicas del cultivo de la coca y la producción de sus derivados.

37. Ambos gobiernos se comprometen a diseñar y poner en marcha programas adecuados para reducir los impactos ecológicos negativos de la producción de coca en la amazonía y asegurar que las acciones de seguridad, interdicción y sustitución no acarreen consecuencias ambientales negativas.

Handwritten signature

38. Un énfasis especial se pondrá también en las acciones referidas al registro y otorgamiento de títulos de propiedad, ya que los problemas ambientales obedecen generalmente a la carencia de un sistema de propiedad seguro. Dicho sistema debe motivar a los campesinos a preservar el medio ambiente, ya que, siendo propietarios, serán concientes de que el uso debido y equilibrado de su propiedad redundará en beneficio propio de manera directa y permanente.

C. MECANISMOS DE APOYO

39. Las políticas anteriormente descritas podrán valerse de los siguientes mecanismos de apoyo, sin perjuicio de otras modalidades de cooperación, en términos de obtener el desarrollo alternativo, reducir el cultivo ilegal de coca, la producción de sus derivados y el tráfico (como se ha establecido en este Convenio):

Acceso a mercados internacionales

40. El aumento del comercio y de la inversión privada es esencial para facilitar el crecimiento económico sostenido y para contribuir a compensar los trastornos económicos que resulten de cualquier programa eficaz contra las drogas ilícitas. Los gobiernos buscarán conjuntamente el crecimiento del comercio entre el Perú y los Estados Unidos, facilitando efectivamente el acceso al mercado de los Estados Unidos y fortaleciendo la promoción de las exportaciones, incluyendo la identificación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos exportables. El Gde EUA también considerará la facilitación de la debida asistencia técnica y financiera para ayudar a que los productos agrícolas peruanos cumplan con los requisitos de admisión de los Estados Unidos.

41. Los gobiernos podrán considerar el establecimiento de políticas económicas y de inversión, y de legislación y reglamentaciones que faciliten la inversión privada. Donde existan las condiciones propicias, los Estados Unidos facilitarán las inversiones privadas en el Perú, tomando en cuenta sus condiciones particulares y su potencial.

TMM
any
—

Operaciones de deuda externa

42. Una economía más fuerte es decisiva para reducir la dependencia en la producción ilegal de coca y el narcotráfico. Dentro del marco de la Iniciativa para las Américas del Presidente Bush, la reducción o el canje de la deuda del Perú con respecto a los Estados Unidos podrá ser considerado para apoyar un programa de reforma económica fuerte orientado al crecimiento.

Apoyo de las instituciones financieras internacionales

43. Los gobiernos de los Estados Unidos de América y el Perú acuerdan trabajar juntos para movilizar un apoyo oportuno y efectivo al Perú de las instituciones multilaterales y económicas, a fin de promover los objetivos de este Convenio, dentro del marco de las políticas económicas sólidas y programas efectivos contra las drogas.

D. DISPOSICIONES FINALES

44. Los gobiernos consideran que una estrategia que los comprometa a poner en práctica o consolidar un programa general o intensificado contra las drogas ilícitas, ha de tomar en cuenta la reducción de la demanda, el consumo y la oferta. Dicha estrategia, a fin de reducir la producción y el tráfico de narcóticos, debe también incluir convenios con relación a la cooperación económica, el desarrollo alternativo, el estímulo del comercio y la inversión, los derechos humanos, así como también convenios sobre la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas e iniciativas diplomáticas y de opinión pública.

45. Los gobiernos reconocen que estos son elementos conexos que se refuerzan mutuamente. El progreso que se logre en uno contribuirá al progreso en los otros. El orden en que se mencionan en el presente documento no pretende asignarles una prioridad determinada.

46. La cooperación económica y las iniciativas internacionales no pueden resultar efectivas a menos que vayan acompañadas de programas dinámicos y concomitantes en contra de la producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas. Es evidente que para que sean plenamente efectivos, los esfuerzos tendientes a reducir la oferta tienen que ir acompañados de una reducción apreciable de la demanda. Los gobiernos reconocen que el intercambio de información sobre los programas para el control de la demanda redundará en beneficio de sus países.

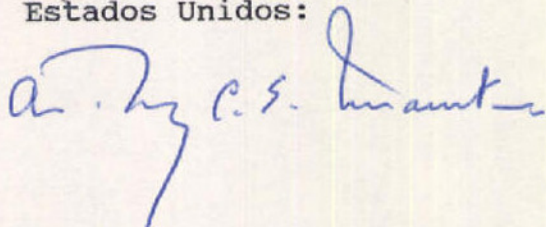
[Handwritten signature]

47. Los gobiernos se proponen que la asociación bilateral creada por este Convenio analizará en detalle las políticas y mecanismos a que se ha hecho referencia anteriormente. Los dos gobiernos se comprometen a implementar los conceptos y principios anteriormente mencionados en cada una de las áreas de cooperación, en la forma permitida por las leyes respectivas de cada país. El Convenio representa el entendimiento y compromiso político de los gobiernos. Compromisos específicos en cada área serán detallados en acuerdos especiales de implementación.

48. Mientras esté pendiente la creación de la asociación bilateral, los dos gobiernos acuerdan adoptar todas las medidas pertinentes que mejoren la observancia de la ley y otras acciones contra el tráfico de narcóticos.

Hecho en Lima, el 14 de mayo de 1991, en idiomas castellano e inglés.

Por el Gobierno de los
Estados Unidos:



Por el Gobierno de la
República del Perú:



AN AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA
AND PERU ON DRUG CONTROL AND ALTERNATIVE DEVELOPMENT POLICY

A. INTRODUCTION

1. Within the context of the bilateral talks held in Washington, D.C. and Lima, between January and April, 1991, representatives of the Governments of the Republic of Peru (GOP) and the United States of America (USG) have assessed the agreements signed at the presidential summit of Cartagena on combatting illicit trafficking in drugs and psychotropic substances.

2. Both governments undertook to strengthen the comprehensive nature of the policies needed to achieve a solution to a problem that is both complex and one of such varied ramifications.

3. On the basis of an exhaustive analysis and an open dialogue, the governments acknowledge that the actions developed thus far in combatting narcotics trafficking in Peru have not had the desired results. Until this past year, the area devoted to coca cultivation has increased rather than decreased, and there is evidence that organized foreign elements and armed Peruvian gangs have begun participating in marketing and expanding the cultivation of the crop within the country.

4. In view of this situation, the governments have reached a political understanding to create a joint venture, which must be coordinated at the highest appropriate political level in both countries, in order to develop a strategy which has the goal of attacking the real causes of the problem, both from the supply and the consumption sides, and to provide the tools necessary to attain in the shortest possible time, the substantial reduction or total elimination of the illegal cultivation of the coca leaf in Peru and the commercialization of its derivatives.

7/20/91
any

5. The governments consider as well that this bilateral Agreement is of vital importance in achieving the global anti-drug objectives of all mankind, involving as it does simultaneously the largest consumer of coca derivatives and the largest cultivator of coca leaf. Close coordination at the highest decision-making levels between the sovereign governments of those territories in which such a preponderant share of the production and consumption of this scourge is concentrated would make it possible to react quickly, and be at all times in a position to break the chain of narco-trafficking at its weakest links and at the timeliest opportunities.

6. The governments believe that the viability and stability of an international cooperation understanding depend to a great extent on its acceptance by public opinion in the signatory countries. The consensus obtained in Peruvian public opinion by the Fujimori Initiative, and the generalized acceptance of the creation of a single organization directly under the President of the Republic to deal with various facets of this problem --an autonomous authority-- lends to this Agreement a legitimacy that will transform it into an effective weapon in the war against narcotics trafficking.

7. Thus, by determining Peruvian concerns and consensus, and incorporating them into a strategy that combines them with the policy of the United States, this Agreement is intended to transcend the traditional type of cooperation between the United States and Peru in this area. In the new form of cooperation suggested by the Agreement, the effort to combat narcotics trafficking is understood as a task for both countries, a joint venture as envisioned in the Declaration of Cartagena, rather than as a fundamentally United States concern and responsibility in Peruvian territory.

8. The partnership between both countries at the highest political level will also make it possible to benefit from the invaluable experience and global perspective that have been gained in Peru with respect to the cultivation, marketing and other aspects of coca supply. Similarly, it will encourage the participation in this struggle of those Peruvians most competent, in both the military and police fields and in other areas related to technology, development, human rights, and environmental protection, thereby enabling it to become a national priority.

THH
any
—

9. The cooperation of both governments in formulating and implementing a global strategy also makes it possible to assess the possibility of giving greater and more detailed consideration to actions to be taken on the supply side, inasmuch as:

(a) Those Peruvian farmers who grow coca do so, despite the fact that various other crops could prove equally or more profitable to them so long as coca leaf prices remain low. Their dependence on the coca crop can be overcome, provided structural adjustment and alternative development measures are implemented, and the required infrastructure is equipped to offer the necessary facilities, and remove the obstacles to producing and selling many products alternative to coca.

(b) The coca-growing farmers constitute an economic and social class quite distinct from those individuals devoted to narcotics trafficking. The farmers are poor and engage in this activity primarily for subsistence reasons, because they cannot legally enter into another; the traffickers are prosperous and face no such barriers. Unlike the traffickers, the farmers do not have to depend on coca; they may, and in fact do, grow other profitable commodities. The farmers are, for the most part, already prepared to be organized as participants in a dialogue that seeks to achieve the goals we feel are set forth in this Agreement, and to become the principal performers of the actions underlying this strategy and espoused thereby.

10. Consequently, the governments of the United States of America and the Republic of Peru have reached a political understanding to cooperate within the framework of this joint venture, to establish and carry out a common strategy to combat drug trafficking, based on the policies formulated below.

B. POLICIES

Institutional Strengthening

11. The governments undertake to complete, within six months of the date of the signing of this Agreement, the structure of this joint venture in order to establish and implement strategies against drug trafficking and in favor of alternative development.

TMH
any
—

12. Prior to that date Peru should have created the legal framework for and put into operation an autonomous authority at the highest political level, reporting directly to the President of the Republic, with the objective of achieving efficient coordination with a decision-making authority at equivalent high levels in the USG. In this way, the division and overlapping of authority presently affecting the widely diverse sectors involved in the administration of both countries can be overcome.

13. With regard to interdiction and security measures, the GOP shall propose policies designed to remove incentives for drug trafficking. The GOP may also set policies for the coordination among the Peruvian National Police, the Army, the Navy, and the Air Force so as to achieve prompt results in matters relating to security, controls, interceptions and required seizures. To that end, a Peruvian autonomous authority shall be responsible for allocating the resources necessary for the battle against illicit trafficking in drugs as well as overcoming the numerous obstacles that currently exist.

14. The governments are aware that measures relating to security and interdiction will require a system of coordination between both countries inasmuch as the purpose behind institutionalization of the joint venture is to combat a powerful enemy --drug trafficking-- in which actions are rapid and unpredictable and tend to infiltrate politics and government.

15. The signatories recognize the need for involvement on both sides of persons or agencies that can make it possible to activate powerful political tools to achieve the objectives set out in this Agreement. Some examples are President Bush's Enterprise for the Americas Initiative, the Brady Plan by the U.S. Secretary of the Treasury, and the Cartagena Declaration. Two other examples are President Fujimori's Initiative, and President Bush's Project Hope, both of which place the fight against drugs within an overall framework intended to extend to the poorest sections of the country the benefits of private ownership, structural reform, alternative opportunity, and the market economy.

7/11/88
any
—

Human Rights

16. Both parties recall the words of the Cartagena Declaration that nothing would do more to undermine the war on drugs than disregard for human rights by participants in the effort, and reiterate the importance of carrying out this battle within the context of internationally developed standards of human rights such as the U.N. Declaration on Human Rights and the Geneva Conventions. President Fujimori's inaugural address outlined a policy of unrestrained respect for human rights, which both parties agree should include actions such as unrestricted access for the International Committee of the Red Cross.

Structural Adjustment and Alternative Development

17. The GOP believes, and the USG takes note, that a sound structural adjustment program must be put into operation, since it is only by correcting economic policies that distort the market for production of legal goods and services, that incentives and resources will be created for investment in alternative development.

18. In this connection, it will also be necessary to include under this category reforms that will guarantee, first of all, that the institutional causes of structural distortion themselves are corrected so that the adjustment will be feasible and lasting, and, secondly, to give priority to measures at the micro-economic level that will provide direct benefits for the underprivileged sectors, which are those most intimately involved in the growing and initial processing of coca.

19. The institutional causes of the distortions will be eliminated only if citizens have access to relevant information and can participate in the process of making rules and decisions relative to their problems. Furthermore, there must be efficient judicial and administrative systems to which all citizens can turn, should their opportunities to engage in legal productive activities be limited, above all when this is the result of arbitrary and abusive actions on the part of the state or other organizations.

TMM
any
—

20. The micro-economic structural adjustment must be directed at structures that have the greatest effect on the disadvantaged, who account for most of the Peruvians engaged or likely to be engaged in coca cultivation, and are those referred to in relation to the difficulty or legal impossibility of developing full rights in legal markets, which are today artificially restricted. The micro-economic adjustment will be directed especially towards allowing farmers universal and rapid access to formal land ownership and the profits thereof, its utilization in obtaining credit, access to business and foreign trade, and participation in price setting.

21. Specifically, the micro-economic structural adjustment in coca-producing areas would involve the following:

(a) Creating the democratic tools that would make it possible to involve the citizens directly in the decision-making process;

(b) Recognizing, adjudicating, and registering property rights;

(c) Wherever there is illegal coca production, agreements on substitution with the farmers, their legal representatives and/or organizations who will receive the benefits of the measures enumerated here;

(d) Eradication programs that take into consideration the safeguarding of human health and preservation of the ecosystem, which should be reviewed in each case as to whether eradication can be most effective as a voluntary or compulsory program or a combination of the two, and as to their probable political and social consequences;

(e) Fostering new economic opportunities, such as programs for alternative development and crop substitution, which will help to dissuade growers from initiating or expanding coca cultivation. Our goal is the sustained reduction in the total area under illicit cultivation;

(f) Implementing reforestation programs in those areas from which coca is eradicated but which are unsuitable for farming;

JMM

any
—

(g) Providing substantial help in granting access to entrepreneurial activity and to credit for all those involved in alternative development activities including crop substitution;

(h) Dismantling of obstacles and bureaucratic mechanisms, particularly those that limit production, trade and export of alternative goods;

(i) Encouraging all parties interested in providing technical solutions and carrying out concrete projects for alternative development with the farmers and/or their organizations.

22. Alternative development activities should not be limited solely to coca-producing areas, but should also include areas where the migration of labor to those zones originates. They should also include activities that can offer alternative employment to persons who are growing coca or might decide to do so in the future.

Security

23. In order to achieve the objectives set forth in this Agreement, it will be necessary to establish a framework of justice, respect for human rights, order, security, and peace in all the zones linked to drug trafficking and related activities.

24. To establish such a framework, it will be necessary to provide security to areas where the substitution process is implemented and to protect interdiction activities. The objective of all such actions is to allow civilian entities to facilitate alternative development and structural adjustment measures. Security will be provided in accordance with international standards of human rights observance.

25. The governments intend to establish, in the shortest possible time, a strategy whose central features are based on the following considerations:

(a) The need to feed, equip, train, provide with uniforms and adequately support the armed and police forces who will be fighting against narco-trafficking and those who support and encourage it;

THM
any

(b) The possibility that military resources could also be dedicated to supporting actions of a social, economic and civic nature that benefit persons affected by narcotrafficking and violence in those areas where the two phenomena coincide;

(c) The necessity of taking measures required to facilitate access on the part of the affected population to the judicial and administrative systems, in order to protect human, civil and political rights and property; and

(d) The possibility of equipping the police and armed forces, to the extent possible, using locally produced raw materials, supplies and labor.

Interdiction

26. Interdiction efforts should be carried out at each stage of the illegal production, distribution, and consumption process of cocaine and its derivatives, and should be part of the comprehensive security plan established by the GOP. The framework of justice, public order, security, and peace being sought should not be jeopardized at any time.

27. Interdiction actions are of various types and may be summarized as follows:

(a) Elimination of the coca crops in accordance with pacts reached with the coca-producing farmers and with the GOP's policies on that matter;

(b) Inspection, investigation and control of essential chemicals diverted to illicit drug trafficking (IDT);

(c) Location and destruction of processing centers for illicit drugs;

(d) Control, seizure, or destruction of infrastructure or means of transport used by IDT;

(e) Dismantling organizations dedicated to IDT;

(f) Combatting drug addiction, and fighting the micro-production of illicit drugs, and the chains of supply and distribution;

TMM
any
—

(g) Investigating and prosecuting narcotraffickers and other persons linked to the processing of and trafficking in cocaine derivatives;

(h) Attacking illicit enrichment from various sources, and the concealment or laundering of illegally derived wealth, by such means as improved recordkeeping by financial institutions, international information sharing, including records of financial transactions, investigations at the national and international level, law enforcement cooperation and investigating suspicious external signs of wealth; and

(i) Seizure of assets from individuals and organizations devoted to narcotrafficking, using such assets for the benefit of the counternarcotics activities of the Peruvian state.

28. To achieve all of this, greater efficiency on the part of the relevant agencies through better equipment, training, and payment of the police forces responsible for interdiction will be necessary, together with the development of a more comprehensive intelligence system in this area.

29. Effective interdiction will require, in addition, improving legal procedures and providing security to judges, together with the strengthening of, and the elimination of corruption in, the jail system.

Prevention

30. The governments intend to make the public aware of the need to confront the problem of narcotrafficking and of drugs from every aspect, through specific preventive measures which can be summarized as follows:

(a) Sensitizing the public in general against drug trafficking and drug use through advertising campaigns and the distribution of educational material;

(b) Recruiting leaders to sensitize the public to the impact of drug trafficking and drugs, thereby converting them into agents of prevention; and

TKM

any

(c) Generating and disseminating information on drug trafficking, drugs, and their harmful effects on society, through research, training, technical assistance, and the use of the media.

31. A relationship between Peruvian and U.S. preventive institutions should be developed and supported with a view to sharing experiences and findings, and establishing links for joint cooperation.

32. Through public and private efforts, the prevention program should receive resources and assistance in developing its projects. Moreover, technical and financial assistance will be sought to increase available resources for this purpose.

Anti-Corruption Efforts

33. The governments consider that one of the most pernicious aspects of drug trafficking is the destruction of the moral fiber of society by the intimidation and bribing of judges, prison authorities, members of the military and police force, the government, private companies and political parties.

34. This corruption can be prevented by means of intelligence, investigative, and surveillance work, and by revising legislation and administrative procedures.

35. In this regard, the GOP has already announced its intention to establish an anti-corruption committee, and both governments are dedicated to preventing and investigating corruption and prosecuting the cases that arise.

The Environment

36. The Governments of the United States and Peru intend to work jointly to determine the environmental effects of producing cocaine and its derivatives.

37. Both governments intend to design and implement appropriate programs to reduce the negative ecological impact of coca in the Amazon, and to ensure that security, interdiction, and substitution efforts do not produce negative environmental effects.

THW
any
✓

38. Special emphasis will also be placed on efforts with respect to the registration and granting of property titles, inasmuch as environmental problems generally result from the lack of a secure property system. Such a system will motivate farmers to preserve the environment since, as owners, they will be aware that proper and balanced use of their property will be of direct and permanent benefit to them.

C. SUPPORT MECHANISMS

39. The aforementioned policies can benefit from the following support mechanisms, without prejudice to other methods of cooperation, as a means of obtaining alternative development, reducing illegal coca cultivation, production of its derivatives and trafficking (as set forth in this Agreement):

Access to International Markets

40. An increase in trade and private investment is essential to facilitate sustained economic growth and to help offset the economic dislocation resulting from any effective program against illicit drugs. The governments will work together to increase trade between Peru and the United States, effectively facilitating access to the United States market and strengthening export promotion, including identification, development and marketing of new export products. The USG will also consider providing appropriate technical and financial assistance to help Peruvian agricultural products comply with U.S. admissions requirements.

41. The governments may consider the establishment of economic and investment policies, as well as legislation and regulations to foster private investment. Where favorable conditions exist, the United States will facilitate private investment in Peru, taking into account its particular conditions and potential.

External Debt Operations

42. A stronger economy is critical to reduced reliance on illegal coca production and drug trafficking. Within the framework of President Bush's Enterprise for the Americas Initiative, reduction or exchange of Peru's debt to the United States could be considered to support a strong, growth-oriented economic reform program.

THW
any

Support of International Financial Institutions

43. The governments of the United States and Peru agree to work together to mobilize timely and effective support for Peru with multilateral and economic institutions in the framework of sound economic policies and effective programs against drugs.

D. FINAL PROVISIONS

44. The governments consider that a strategy which commits the governments to implementing or strengthening a comprehensive, intensified anti-narcotics program must address the issues of demand reduction, consumption and supply. Such a strategy, in order to reduce narcotics production and trafficking, also must include agreements regarding economic cooperation, alternative development, encouragement of trade and investment, human rights, as well as agreements on attacking the traffic in illicit drugs, and on diplomatic and public diplomacy initiatives.

45. The governments recognize that these areas are inter-connected and self-reinforcing. Progress in one area will help achieve progress in others. The order in which they are addressed in this document is not meant to assign to them any particular priority.

46. Economic cooperation and international initiatives cannot be effective unless there are concomitant, dynamic programs attacking the production of, trafficking in and demand for illicit drugs. It is clear that to be fully effective, supply reduction efforts must be accompanied by significant reduction in demand. The governments recognize that the exchange of information on demand control programs will benefit their countries.

47. The governments intend that the joint venture created by this Agreement will analyze in detail the policies and mechanisms to which reference has been made above. The two governments will endeavor to implement the concepts and principles, as stated above, in each area of cooperation as allowed under the respective laws of each country. The Agreement represents the political understanding and the political undertaking of the governments. Actual commitment in each area will be detailed in specific implementation agreements.

TMM
any
—

48. Pending the creation of the joint venture, the two governments agree to take all appropriate measures to enhance law enforcement and other actions against narcotics trafficking.

Done at Lima this 14 day of May, 1991, in the English and Spanish languages.

For the Government
of the United States:

Anthony C. S. ...

For the Government of the
Republic of Peru:

...